

I

El proyecto de real decreto da cumplimiento al mandato recogido en la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, que establece un mandato al Gobierno para aprobar un reglamento que desarrolle las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, reuniendo en un texto reglamentario aquellas condiciones básicas aplicables en todo el territorio nacional. Ahora bien, como establece la MAIN aportada, este real decreto no solo cumple con el mandato impuesto por la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022, de 31 de marzo, sino que completa el acervo normativo en materia de accesibilidad universal, determinando de manera expresa aquellas condiciones que, junto a las propias de la accesibilidad física y sensorial, permiten a las personas con dificultades cognitivas hacer uso de los servicios a los que alude el ámbito de aplicación del TRLGD en igualdad de condiciones que el resto.

Específicamente, tal y como establece el art. 2 del Proyecto, el reglamento proyectado surtirá efectos en todo el territorio español en los ámbitos a los que se refiere el art. 5 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que son los siguientes:

- a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
- c) Transportes.
- d) Bienes y servicios a disposición del público.
- e) Relaciones con las administraciones públicas, incluido el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de aquellas.
- f) Administración de justicia.
- g) Participación en la vida pública y en los procesos electorales.
- h) Patrimonio cultural, de conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, siempre con el propósito de conciliar los valores de protección patrimonial y de acceso, goce y disfrute por parte de las personas con discapacidad.
- i) Empleo.

El texto que se informa consta de una exposición de motivos, un artículo único, que aprueba el Reglamento de las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos -**RGPD**-), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -**LOPDGDD**- conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamientos de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el artículo **4.1** del **RGPD**, define datos personales como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”*.

A su vez, de acuerdo con el contenido de la “Definición” del **punto 2** del propio **artículo 4** del **RGPD**, para que exista tratamiento de datos de carácter personal, se requiere la realización de *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”*. Por su parte, la definición de “fichero” se contiene en el apartado 6 del artículo 4, que refiere a *“todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica”*.

Por su parte, los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. *-Ámbito de aplicación de los Títulos I a IX y de los artículos 89 a 94-*, establecen que:

“1. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

Pues bien, según se colige del contenido del proyecto, (art. 1 del Reglamento proyectado) su objetivo es *establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, con el fin de contribuir al ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía, así como garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, de todas las personas y, en especial, de las personas con dificultades de comprensión, comunicación e interacción derivada de discapacidad intelectual, mental, daño cerebral, parálisis cerebral, trastorno del espectro de autismo, deterioro cognitivo o situaciones socioeconómicas como la inmigración o el analfabetismo.* Esto es, no se desprende de la finalidad del reglamento establecer ningún tratamiento de datos personales, sino regular las medidas para que las relaciones que surjan en los distintos ámbitos de aplicación del reglamento (a los que ya se ha hecho referencia al mencionar las actividades contenidas en el art. 5 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social) puedan ser ejercitadas por las personas a las que dicho texto se refiere con plenitud de derechos y en condicione de igualdad. Por lo tanto, los tratamientos de datos que resulten de dichas relaciones deberán venir regulados en todos sus aspectos por la normativa que regule las mismas; esto es, será la normativa propia de la Administración de Justicia (por ejemplo) la que deberá de regular los tratamientos de datos que resulten de dichas relaciones (bases de licitud de los tratamientos (art. 6 RGPD), principios relativos al tratamiento: minimización, limitación de la finalidad, etc. (art. 5 RGPD), siendo el reglamento ahora informado una norma transversal para asegurar los derechos a la igualdad de las personas con alguna discapacidad cognitiva.

Dado que la discapacidad cognitiva es un dato relativo a la salud conforme lo define el art. 4.15 RGPD: «datos relativos a la salud»: datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud, serán las normas que regulen los distintos ámbitos a los que se dirige la norma las que deberán establecer y/o adaptar sus tratamientos de datos, en las distintas leyes que regulen dichos tratamientos (véase, por ejemplo, para el ámbito del Empleo (letra i) del art. 5 del Texto Refundido ya citado, el art. 16 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, y específicamente el párrafo segundo del apartado 6: *En cuanto al tratamiento de categorías especiales de datos será de aplicación lo previsto en el artículo 9.2.b) del Reglamento (UE) 2016/679, al ser necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del*

responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social) al hecho de que se tratarán datos de categorías especiales del art. 9 del RGPD, para lo que se necesita no sólo una base de licitud del art. 6.1 RGPD, sino una causa que levante la prohibición de tratamiento de dichos datos (art. 9.2 RGPD), prohibición contenida en el art. 9.1 RGPD).

En cualquier caso, el proyecto informado contiene una disposición específica (la Disposición adicional primera) destinada a la regulación de los datos personales en el ámbito del reglamento, que hace una remisión genérica al cumplimiento al RGPD y a la LOPDGDD, que dice así:

Protección de datos de carácter personal.

En las actuaciones previstas en este reglamento que tengan relación con la recogida y tratamiento de datos de carácter personal se estará a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 96/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y su normativa de desarrollo.

Esta redacción es tributaria de la contenida en la Disposición adicional segunda, Tratamiento de la información, del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que a su vez se remite, al igual que la ahora informada, a la (entonces vigente) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, y su normativa de desarrollo.

En el ámbito del proyecto informado esta Agencia no se opone a dicha redacción, si bien recuerda -como ya se ha hecho hincapié en los párrafos anteriores y en Informes de esta Agencia- que, para el ámbito de las distintas leyes materiales que regulen específicamente los tratamientos de datos personales de categorías especiales, la doctrina del Tribunal Constitucional (recogida fundamentalmente en las sentencias 292/2000 de 30 noviembre y 76/2019 de 22 de mayo) ha establecido que los límites al derecho fundamental a la protección de datos personales deben establecerse por una norma con rango de ley, previa ponderación por el legislador de los intereses en pugna atendiendo al principio de proporcionalidad, definiendo todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora mediante reglas precisas, que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias, y estableciendo las garantías adecuadas, siendo la propia ley la que habrá de contener las

garantías adecuadas frente a la recopilación de datos personales que autoriza. El Tribunal Constitucional (TC) ha sido claro en cuanto a que la previsión de las garantías adecuadas no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado. Solo ese entendimiento sería compatible con la doble exigencia que dimana del artículo 53.1 CE. Así, si la norma incluyera una remisión para la integración de la ley con las garantías adecuadas establecidas en normas de rango inferior a la ley, sería considerada como una deslegalización que sacrifica la reserva de ley ex artículo 53.1 CE, y, por este solo motivo, debería ser declarada inconstitucional y nula. Se trata, en definitiva, de “garantías adecuadas de tipo técnico, organizativo y procedimental, que prevengan los riesgos de distinta probabilidad y gravedad y mitiguen sus efectos, pues solo así se puede procurar el respeto del contenido esencial del propio derecho fundamental”. Tampoco sirve por ello que para el establecimiento de dichas garantías adecuadas y específicas la ley se remita al propio RGPD o a la LOPDGDD.